



Sra. Salgueiro Cortiñas, Presidenta

Sr. Estella Hoyos, Consejero y
Ponente

Sr. Pérez Solano, Consejero

Sr. Quijano González, Consejero

Sr. Nalda García, Consejero

Sr. Madrid López, Consejero

Sr. Sagarra Renedo, Secretario
accidental

Excusa su ausencia:

Sr. Fernández Costales, Consejero

La Sección Segunda del Consejo Consultivo de Castilla y León, reunida en Valladolid el día 7 de julio de 2004, ha examinado el *expediente de responsabilidad patrimonial iniciado como consecuencia de la reclamación presentada por D. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx*, y a la vista del mismo y tal como corresponde a sus competencias, emite, por unanimidad, el siguiente

DICTAMEN

I

ANTECEDENTES DE HECHO

El día 23 de junio de 2004 tuvo entrada en este Consejo Consultivo la solicitud de dictamen preceptivo sobre el *expediente de responsabilidad patrimonial iniciado como consecuencia de la reclamación presentada por D. xxxxxx xxxxxx xxxxxx debido a los daños ocasionados por la incursión de unos jabalíes y ciervos en unos cultivos agrícolas de su propiedad.*

Examinada la solicitud y admitida a trámite con fecha 24 de junio de 2004, se procedió a darle entrada en el registro específico de expedientes del Consejo con el número de referencia 428/2004, iniciándose el cómputo del plazo para la emisión del dictamen, previa ampliación del mismo, tal como dispone el artículo 53 del Reglamento Orgánico del Consejo Consultivo, aprobado por el Decreto 102/2003, de 11 de septiembre. Turnado por la Sra. Presidenta del Consejo, correspondió su ponencia al Consejero Sr. Estella Hoyos.



Primero.- Con fecha 29 de septiembre de 2003, se recibe en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en xxxxxx una reclamación de indemnización, presentada por D. xxxxx xxxxx xxxxx, debido a los daños producidos por la incursión de unos jabalíes y ciervos en unos cultivos agrícolas de su propiedad, en el paraje de xxxxxxxxx, en la localidad de xxxxxxxx, dentro del término municipal de xxxxxxxxx (xxxxxxx), dentro de la Reserva Regional de Caza de xxxxxxxxx.

Se estima que el daño se produjo el 28 de julio de 2003.

El personal adscrito a la reserva constata mediante su informe que “la parcela ya había sido sesteada en primavera por el ciervo y ahora en julio había sido dañada por el jabalí con encames y carriles”.

La valoración del daño, realizada el 30 de septiembre de 2003 por el Director Técnico de la Reserva Regional de Caza, asciende a la cantidad de 720 euros.

Segundo.- Con fecha 11 de noviembre de 2003, la Delegada Territorial de la Junta de Castilla y León en xxxxxxxx nombra Instructor del expediente.

El 27 de enero de 2004 se requiere al interesado para la mejora de la reclamación, constando en el expediente su recepción el 4 de febrero de 2004. La documentación requerida (original o fotocopia compulsada del documento acreditativo de la titularidad a su favor de los cultivos objeto de los daños cuya indemnización se solicita) tiene entrada en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en xxxxxx el 13 de febrero de 2004.

El 17 de febrero de 2004 se requiere al Jefe de la Sección de Vida Silvestre para que emita un informe sobre los motivos de la reclamación, la causa del daño y el importe en el que se valora el perjuicio.

Este informe se emite el 19 de febrero y en él se hacen constar los siguientes extremos: “Durante el año 2003, se causaron daños al cultivo de centeno perteneciente a D/D^a. xxxxx xxxxx, xxxxx (...). Este hecho es comprobado por personal de Guardería adscrito a la Reserva (...). El importe total en que se valora el perjuicio es de 720'00 €”.



Tercero.- El día 24 de febrero de 2004, concluida la instrucción del expediente, se da audiencia del mismo al interesado (que recibe la notificación el día 2 de marzo), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, a efectos de que formule las alegaciones y presente los documentos y justificaciones que estime oportunos. El interesado, dentro del plazo concedido al efecto, no presenta escrito de alegaciones o documentación alguna.

Cuarto.- La propuesta de resolución, de 14 de abril de 2004, señala que procede estimar la reclamación presentada por D. xxxxx xxxxx xxxxxx.

Quinto.- El 21 de abril de 2004 la Asesoría Jurídica de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en xxxxx informa favorablemente sobre la propuesta de resolución indicada.

En tal estado de tramitación, se dispuso la remisión del expediente al Consejo Consultivo de Castilla y León para que emitiera dictamen.

II CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1ª.- El Consejo Consultivo de Castilla y León dictamina en el presente expediente, con carácter preceptivo, de conformidad con lo previsto en el artículo 4.1.h), 1º de la Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León, correspondiendo a la Sección Segunda emitir el dictamen según lo establecido en el punto 4º, regla B), apartado g), del Acuerdo de 30 de octubre de 2003, del Pleno del Consejo, por el que se determina el número, orden, composición y competencias de las Secciones.

2ª.- El procedimiento se ha instruido con arreglo a lo previsto en los artículos 139 a 144 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, desarrollados por el Reglamento de los procedimientos de las



Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo.

No obstante, debe recordarse que conforme al artículo 89.3 de la Ley 30/1992 ya citada, la resolución (y también su notificación, de acuerdo con el tenor literal del artículo 58.2 de la referida Ley) debe indicar los recursos que procedan contra la misma, el órgano ante el que deben presentarse y el plazo para su interposición.

3ª.- Concurren en el interesado los requisitos de capacidad y legitimación exigidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La competencia para resolver la presente reclamación corresponde a la Delegada Territorial de la Junta de Castilla y León en xxxxxxxx, en virtud de lo dispuesto en los artículos 142.2 de la mencionada Ley 30/1992 y 19 del Decreto 297/1999, de 18 de noviembre, de atribución de competencias de la Junta de Castilla y León al Consejero de Medio Ambiente y de desconcentración de otras en sus órganos directivos centrales o en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León.

4ª.- El artículo 106.2 de la Constitución establece que “los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”.

La referencia constitucional a la Ley debe entenderse hecha a los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a la que además se remite el artículo 82.1 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo (entre otras, Sentencias de 1 de marzo, 21 de abril y 29 de octubre de 1998; 28 de enero de



1999; 1 y 25 de octubre de 1999), así como la doctrina del Consejo de Estado (Dictámenes de 27 de marzo de 2003, expte. nº 183/2003; 6 de febrero de 2003, expte. nº 3583/2002; y 9 de enero de 2003, expte. nº 3251/2002), la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública exige la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) La existencia de un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas.

b) El carácter antijurídico del daño, en el sentido de que la persona que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportarlo, de acuerdo con la Ley.

c) La imputabilidad a la Administración de la actividad dañosa, es decir, la integración del agente en el marco de la organización administrativa a la que pertenece o la titularidad pública del servicio o la actividad en cuyo ámbito se produce el daño.

d) La relación de causa a efecto entre la actividad administrativa y el resultado dañoso, nexo causal que implica la necesidad de que el daño sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de un servicio público o actividad administrativa en relación directa e inmediata.

e) Ausencia de fuerza mayor.

f) Que no haya transcurrido un año desde el momento en que se produjo el hecho causante.

5ª.- El asunto sometido a consulta versa sobre la reclamación de daños y perjuicios formulada por D. xxxxx xxxxx xxxxx como consecuencia de los daños ocasionados por la incursión de unos jabalíes y ciervos en unos cultivos agrícolas de su propiedad.

El interesado ha ejercitado su derecho en tiempo hábil, de acuerdo con lo establecido en el artículo 142.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En efecto, consta que los daños se produjeron el día 28



de julio de 2003, mientras que la reclamación se ha presentado con fecha 29 de septiembre del mismo año, dentro, pues, del plazo señalado en el artículo 142.5 de la Ley 30/1992 anteriormente citada.

A pesar de que la solicitud no especifica si el daño de la parcela es total o parcial, tal omisión se cubre satisfactoriamente con el informe de daños efectuado en el periodo probatorio.

A la vista de los informes obrantes en el expediente resulta acreditado que el origen de los daños se halla en la aparición de ciervos y jabalíes en diversos parajes de la localidad de xxxxxxxx, dentro de la Reserva Regional de Caza de xxxxxxxxx.

El jabalí y el ciervo tienen la consideración de especie cinegética de caza mayor, tal y como se deduce del anexo del Decreto 172/1998, de 3 de septiembre, por el que se declaran las especies cinegéticas de Castilla y León. Además, se considera pieza de caza, según el artículo 9 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León.

Por ello, el título de imputación de responsabilidad deriva directamente de lo previsto en el artículo 12.1.a) de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, a cuyo tenor "la responsabilidad de los daños producidos por la pieza de caza, excepto cuando el daño sea debido a culpa o negligencia del perjudicado o de un tercero, corresponderá (...) en los terrenos cinegéticos, a quien ostente la titularidad cinegética de dichos terrenos", pues la titularidad cinegética de los terrenos incluidos en las reservas regionales de caza corresponde a la Junta de Castilla y León, conforme a lo establecido por los artículos 19 y 20.2 de la misma Ley 4/1996.

6ª.- El importe de la indemnización deberá actualizarse a la fecha en la que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 141.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.



**CONSEJO
CONSULTIVO**
DE CASTILLA Y LEÓN

III CONCLUSIONES

En mérito a lo expuesto, el Consejo Consultivo de Castilla y León informa:

Procede dictar resolución estimatoria en el expediente de responsabilidad patrimonial iniciado como consecuencia de la reclamación presentada por D. xxxxx xxxxx xxxxx debido a los daños ocasionados por la incursión de unos jabalíes y ciervos en unos cultivos agrícolas de su propiedad.

No obstante, V.E. resolverá lo que estime más acertado.